

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**

DEMANDANTE	: PATRICIA DEL SOCORRO ÁLVAREZ ZAPATA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-025-2022-00031-01
RADICADO INTERNO	: 020-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 048

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el grado jurisdiccional de consulta, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante solicita se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir de la fecha en que acreditó la totalidad de los requisitos, y de manera subsidiaria solicita se condene a Colpensiones a reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez debidamente indexada, los intereses moratorios o en subsidio la indexación, y las costas del proceso

Como supuestos facticos manifestó que nació el 18 de febrero de 1963, se afilió por primera vez al instituto de Seguros Sociales para realizar aportes desde el 4 de marzo de 1982 hasta el 30 de septiembre de 2021, y que además

estuvo vinculada al régimen exceptuado del magisterio donde obtuvo una pensión de jubilación reconocida mediante **Resolución número 2018532041 del 23 de abril de 2018**.

Por considerar acreditado los requisitos para acceder a la pensión de vejez presentó reclamación ante Colpensiones la cual fue negada mediante resolución **SUB-150959 del 14 de julio del 2020**.

Que el 4 de agosto de 2020 presentó reclamación ante Colpensiones solicitando el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez la cual fue negada a través de la **Resolución SUB-177141 del 16 de agosto del 2020** por incompatibilidad pensional al tener a su nombre una prestación de jubilación reconocida por la fiduciaria la previsora SA.

Que el 7 de abril del 2021 solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión de vejez y en subsidio al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, y a través de la **Resolución SUB-116802 del 20 de mayo del 2021** Colpensiones niega nuevamente el reconocimiento de las prestaciones solicitadas, el 10 de junio del 2021 presentó recurso de reposición y el subsidio apelación ante la anterior resolución y Colpensiones a través de la **Resolución SUB-187163 del 10 de agosto del 2021 y DPE 6742 del 30 de agosto de 2021** respectivamente resolvió de forma negativa los recursos interpuestos.

### **RESPUESTA COLPENSIONES**

La demandada al dar respuesta manifestó que acepta la fecha de nacimiento de la demandante, la afiliación al RPM y las cotizaciones realizadas, la pensión que le fue reconocida por el magisterio, las peticiones presentadas ante la entidad para el reconocimiento de la pensión de vejez y de la indemnización sustitutiva, así como también acepta la respuesta negativa dada a las mismas y los recursos interpuestos, y frente a los demás manifestó que no son hechos sino afirmaciones subjetivas, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de vejez con su respectivo retroactivo, inexistencia de reconocer y pagar indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de

la indexación, compensación, prescripción, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y la innominada.

### **SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA**

En sentencia del 16 de enero de 2023, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que a la señora PATRICIA DEL SOCORRO ÁLVAREZ ZAPATA le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez del SGSSI, la cual resulta compatible con la pensión de jubilación que actualmente percibe a cargo del FNPSM. CONDENÓ a COLPENSIONES, a reconocer y pagar a favor de señora PATRICIA DEL SOCORRO ÁLVAREZ ZAPATA, la pensión de vejez a partir de la fecha en que la actora acredite el retiro de la Universidad de Antioquia, teniendo en cuenta una mesada pensional para el año 2022 de \$1.705.949, la cual deberá ser actualizada de acuerdo con el IPC certificado por el DANE para cada anualidad, y liquidar y pagar 13 mesadas pensionales al año.

Así mismo se indicó que la entidad además debe indexar, si hubiese lugar a ello, las mesadas pensionales causadas hasta el momento de su pago efectivo, conforme al IPC que certifique el DANE.

AUTORIZÓ a COLPENSIONES- a descontar del eventual retroactivo pensional que reconozca y sobre las mesadas ordinarias, los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud.

ABSOLVIO a COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas en su contra por la señora PATRICIA DEL SOCORRO ÁLVAREZ ZAPATA, DECLARÓ improbadas las excepciones propuestas, CONDENÓ en costas a cargo de la demandada y a favor de la demandante, y fijó como agencias en derecho la suma de \$2.320.000.

### **CONSULTA**

El proceso llega a esta Corporación en el grado jurisdiccional de CONSULTA de conformidad con lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y ss.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada de la parte demandante indicó que se acreditó en el plenario que a la señora PATRICIA DEL SOCORRO ALVAREZ ZAPATA le asiste derecho a que le sea reconocida la pensión de vejez a partir de la fecha en que la actora acredite el retiro, teniendo en cuenta una mesada pensional para el año 2022 de \$ 1.705.949, la cual deberá ser actualizada de acuerdo con el IPC certificado por el DANE para cada anualidad y liquidar y pagar 13 mesadas pensionales al año, además se debe indexar, si hubiere lugar a ello, las mesadas pensionales causadas hasta el momento de su pago efectivo, conforme al IPC que certifique el DANE, por parte de COLPENSIONES, con independencia de la pensión de jubilación que actualmente percibe, dado que su vinculación al régimen exceptuado del magisterio opero con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003, situación que permite recibir la prestación que solicita, dado que el tiempo acreditado en el fondo de pensiones COLPENSIONES no fue tenido en cuenta para efectos de financiar la pensión de jubilación que actualmente percibe, dado que el tiempo que acredita en COLPENSIONES no fue tenido en cuenta para efectos de financiar la pensión de jubilación.

Que, además, es pertinente el reconocimiento de los intereses o en subsidio la indexación de la condena deprecada, pues la negativa de COLPENSIONES de negar la Pensión de vejez fue injustificada y naturalmente el transcurso del tiempo deviene en la depreciación del poder adquisitivo de los montos que eventualmente han de reconocerse por el Despacho.

Como sustento de la compatibilidad de la pensión solicitada cita apartes de la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira Radicación No: 66001-31-05-001-2014-00682-01.

### **PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO**

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar si hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de vejez del RPM en el SGSSI, a pesar de contar con una pensión de jubilación del régimen exceptuado del magisterio

y en consecuencia si hay lugar a la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante nació el 18 de febrero de 1963 (fls 18 expediente digital), por lo que cumplió los 57 años el mismo mes y día del año 2020, y que esta ha cotizado al ISS hoy COLPENSIONES hasta marzo de 2023 un total de 1.561,86 según historia laboral visible a folios 32 y ss de la contestación de Colpensiones.

Así mismo se encuentra probado que a través de la **Resolución número 2018532041 del 23 de abril de 2018**, (fls 20 a 23 de la demanda), le fue reconocida la pensión de jubilación a partir del 19 de febrero de 2018 como docente de vinculación departamental.

Que luego de solicitar la pensión de vejez ante Colpensiones la misma fue negada mediante Resolución **SUB-150959 del 14 de julio del 2020**, y posteriormente solicitó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez la cual fue negada a través de la **Resolución SUB-177141 del 16 de agosto del 2020**, (fls 30 a 50 de la demanda).

Que el 7 de abril del 2021 (fls 52 de la demanda), solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión de vejez y en subsidio al reconocimiento de la indemnización sustitutiva, la cual fue negada a través de la **Resolución SUB-116802 del 20 de mayo del 2021**, frente a la cual interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, mismos que fueron resueltos de forma negativa a través de la **Resolución SUB-187163 del 10 de agosto del 2021 y DPE 6742 del 30 de agosto de 2021** respectivamente, (fls 64 y ss de la demanda).

Colpensiones niega nuevamente el reconocimiento de las prestaciones solicitadas, el 10 de junio del 2021 presentó recurso de reposición y el subsidio apelación ante la anterior resolución y Colpensiones a través de la **Resolución SUB-187163 del 10 de agosto del 2021 y DPE 6742 del 30 de agosto de 2021** respectivamente resolvió de forma negativa los recursos interpuestos.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

**1. De la compatibilidad de la de la pensión de vejez del RPM con la pensión de jubilación del magisterio.**

Por su parte el artículo 19 de la ley 4 de 1992 establece lo siguiente:

*“Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:*

*a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores de la Rama Legislativa*

*...*

*d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra*

*...*

*g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados. (...)*”

Y el artículo 279 de la L 100 de 1993 preceptúa con respecto a las excepciones del sistema integral de seguridad social lo siguiente:

*“EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley **no se aplica** a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.*

*Así mismo, **se exceptúa** a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo **serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración**. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (...)*”

- Y adicionalmente, el **artículo 31 del Decreto 692 de 1994** que regula la posibilidad de acumular cotizaciones, les permite a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que sean docentes del sector privado y que realicen aportes al Régimen de Prima Media o al Régimen de Ahorro Individual al señalar:

*“POSIBILIDAD DE ACUMULAR COTIZACIONES EN EL CASO DE PROFESORES. Las personas actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, **que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado**, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado fondo, **o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro individual con solidaridad**, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes en el régimen seleccionado.”*

En este sentido, si la docente afiliada al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, también se desempeña como docente en el sector privado, el art. 17 de la Ley 100 de 1993 obliga a estos empleadores a realizar aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

Y frente a este aparte de la normativa anterior, la Corte Suprema de Justicia en sentencia 40.848 de 2011 dijo:

*“... precepto reglamentario que sólo puede ser interpretado en su sentido natural y obvio, es decir, que los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, **si paralelamente laboran para una persona jurídica o natural de carácter privado, pueden afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que, al cumplimiento de las exigencias previstas en su régimen, accederán a las prestaciones propias del mismo.***

*Además, **los reglamentos del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES no restringen la viabilidad de que los profesores de establecimientos educativos de orden particular, aporten para obtener la pensión de vejez**, sino que, más bien, de su examen lo que se colige es que son afiliados forzosos al régimen de prima media con prestación definida, de suerte que a sus empleadores se les impone el deber de vincularlos y sufragar las cotizaciones causadas, mientras permanezca vigente la relación laboral, como sucedió en el evento bajo examen, en el que los colegios “Salesiano San Medardo”, desde febrero de 1969 hasta junio de 1972, y “La Presentación” desde febrero de 1977 hasta noviembre de 2004, honraron la obligación de realizar los aportes para pensión.”*

- Y en sentencia reciente SL 4117 de 2020 manifestó:

*“Sea oportuno señalar que el hecho de estar inmerso en el régimen prestacional del Magisterio, no le impide al docente en cuestión, de*

*primera mano, cotizar al ISS por servicios a órdenes de otros empleadores de carácter privado que en virtud a la obligatoriedad que sobre el particular impone la Ley, se ven constreñidos a afiliarlo, y consecuentemente, a que éste logre una pensión bajo las reglas de dicho ente de seguridad social*

(...)

Y, recientemente, en la sentencia CSJ SL 451-2013, la Sala precisó:

*“En lo que tiene que ver con la segunda cuestión planteada en el cargo, en este caso era perfectamente posible emitir el bono pensional para financiar una eventual pensión de vejez, pues las cotizaciones que pretenden ser compensadas a través del mismo, fueron hechas al Instituto de Seguros Sociales, por servicios prestados por la demandante a instituciones privadas, con anterioridad a su ingreso al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y que, **en todo caso, eran diferentes a los tiempos de servicio que sirvieron de base al reconocimiento de la pensión oficial.***

*En tales condiciones, no existía incompatibilidad alguna entre el bono pensional y la pensión de jubilación oficial, como bien lo concluyó el Tribunal, ni se está prohijando una mezcla inadecuada entre dos regímenes, como lo denuncia de manera confusa la censura. ...*

*En sentencias como la del 6 de diciembre de 2011, Rad. 40848, la Sala ha dicho **que no existen razones jurídicamente válidas para concluir que la pensión de jubilación oficial que se reconoce a un docente, resulta incompatible con la pensión de vejez que puede obtener el Instituto de Seguros Sociales, por servicios prestados a instituciones de naturaleza privada.** (...)*” (Negrilla de la Sala)

Y más reciente, la Corte Suprema de Justicia expresó en la sentencia SL 1127 de 2022:

*“Por otra parte, el censor elabora un argumento referente al deber de acumular las cotizaciones en el Fondo de Prestaciones del Magisterio con fundamento en el artículo 31 del Decreto 692 de 1994; no obstante, de la lectura de aquel precepto se extrae claramente que no es un imperativo legal sino una **potestad que la ley le otorga a los docentes oficiales afiliados a aquel fondo para que elijan la opción que consideren más favorable a sus intereses,** esto es, que: (i) los aportes adicionales se administren en el Fomag, o (ii) **que sean gestionados en cualquiera de las administradoras del régimen de prima media** o de ahorro individual con solidaridad (CSJ SL, 06 dic. 2001, rad. 40848 y CSJ SL3775-2021, entre otras). Así lo precisó la Sala en esta última sentencia, en la que indicó:*

*(...) Una lectura desprevenida de la norma en cita, permite colegir que desde el título mismo del precepto se descarta la mentada «imperatividad» pregonada por la recurrente, pues lo que allí se establece, claramente, es una opción formulada en términos*



*positivos, como un derecho y no como una imposición, que **permite a los docentes oficiales afiliados al Fondo del Magisterio que cumplan la condición de recibir remuneraciones del sector privado, seleccionar la opción que consideren pertinente en relación con las alternativas que allí se plantean: i) que esos aportes adicionales se administren en el Fomag o, ii) que sean gestionados en cualquiera de las administradoras del régimen de prima media o de ahorro individual con solidaridad (...).***

*En el caso que se analiza **el actor eligió que sus aportes pensionales derivados de la relación laboral con instituciones del sector privado se cotizaran inicialmente al ISS y posteriormente a la AFP Porvenir S.A., es decir, hizo uso de la prerrogativa que el marco legal le brindaba, como correctamente lo entendió el Tribunal. Por tanto, la referencia normativa que menciona la censura tampoco tiene incidencia alguna en la definición de la controversia planteada en el proceso.*** (Resalto de la Sala)

Quedando claro entonces que los docentes del sector oficial, en forma simultánea, pueden desempeñarse como trabajadores del sector privado o incluso, en forma más específica, como docente en el sector privado, y por esta labor realizar aportes en el Régimen de Prima Media o en el Régimen de Ahorro Individual, tal y como lo hizo la demandante a Colpensiones al realizar cotizaciones a través de los siguientes empleadores, DUQUE PUERTA Y CIA, INSTITUTO PARROQUIAL JESUS DE LA BUENA ESPERANZA, PARROQUIA SAN LORENZO Y LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, desde el 04 de marzo de 1982 a marzo de 2022, tal y como se extrae de la historia laboral aportada por Colpensiones a folios 32 y ss de la contestación de la demanda.

En orden de lo mencionado se precisa que las semanas anteriores **no fueron tenidas en cuenta para el reconocimiento de la pensión de jubilación por parte de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN** actuando en representación del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, afirmación que se deriva de la información que se extrae de la Resolución número 2018532041 del 23 de abril de 2018, en la que se plasmó que la pensión fue reconocida en virtud del tiempo laborado al servicio de la institución educativa Pbro. Antonio José Bernal del Municipio de Medellín desde el 28 de marzo de 1994 al 18 de febrero de 2018, siendo esta la razón por la que a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez con los aportes o cotizaciones sufragados en el

SGSSI del RPM al no haberse tenido en cuenta los mismos para el reconocimiento de la pensión de jubilación del magisterio.

Por otro lado, frente a la calidad que tienen los recursos del Sistema General de Pensiones, no se puede pasar por alto el contenido del literal m) del art. 13 de la Ley 100 de 1993, en el que se plasmó:

*“Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran.”*

Normatividad que permite concluir, que los dineros recibidos por Colpensiones por los **empleadores del sector privado**, al ser recursos de la seguridad social no hacen parte de la Nación y en consecuencia no son dineros públicos. Al respecto, el Consejo de Estado en la sentencia del 22 de octubre de 2009, radicación No. 05001-23-31-000-2001-00423-01, plasmó:

*“...de conformidad con lo establecido reiteradamente tanto por la Corte Constitucional como por esta Corporación, los recursos que administra el ISS, así provengan de las cotizaciones de entes públicos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, **no gozan de la calidad de públicos**, por lo cual, en principio, la percepción de una asignación pagada por el ISS **no es incompatible con la de otra asignación del tesoro público.**” (Negrilla fuera del texto)*

Y en la sentencia SL 2649 de 2020 se dijo:

*“En lo referente al último tema, relacionado con la incompatibilidad de las pensiones por infracción del art. 121 de la Ley 100/1993, se precisa que los dineros con que el ISS, hoy Colpensiones, reconoce las prestaciones, **no pueden ser considerados como provenientes del tesoro público**, toda vez que corresponden a las cotizaciones efectuadas por los empleadores y trabajadores, producto de su labor. Así lo ha indicado la jurisprudencia de esta Sala en diferentes sentencias, entre otras, en la CSJ SL9730-2014 y la SL5118-2019.*

*De acuerdo con lo expuesto, en este caso era posible emitir el bono pensional para financiar una eventual pensión de vejez, pues las cotizaciones que pretenden ser compensadas a través del mismo fueron realizadas al Instituto de Seguros Sociales, **por servicios prestados por el demandante a instituciones privadas, con anterioridad a su ingreso al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad** y que, en todo caso, eran diferentes a los tiempos de servicio que sirvieron de base al reconocimiento de la pensión oficial.” (Resalto realizado por la Sala)*

Ahora, respecto al reconocimiento pensional a cargo de Colpensiones debe decirse igualmente que se CONFIRMARA la sentencia de primera instancia por lo siguiente:

Es claro que para el caso bajo estudio le es aplicable a la demandante para el reconocimiento de la pensión de vejez los requisitos establecidos en el artículo 33 de la ley 700/93, modificado por la ley 797 de 2003, esto es, cumplir una edad de 57 años y tener 1.300 semanas cotizadas.

El primer requisito de la edad fue cumplido el **18 de febrero de 2020** al haber nacido el 18 de febrero de 1963, y el segundo requisito con respecto a las semanas cotizadas se encuentra acreditado toda vez que según historia laboral allegada por Colpensiones la demandante cuenta hasta el mes de marzo de 2022 con un total de **1.567,86** semanas cotizadas teniendo en cuenta los periodos de julio de 2000, enero y mayo de 2004, febrero y marzo de 2007, febrero y diciembre de 2009, y febrero de 2010 como meses cotizados por 30 días completos por cuanto la entidad no podía descontar días por intereses por mora en el pago sino que debió haber ejercido las acciones de cobro respectivas.

En virtud de lo anterior es claro que la demandante cumple a cabalidad los requisitos de la normativa en cita para tener derecho a la pensión de vejez pretendida.

Ahora, con respecto al disfrute de la pensión debe decirse que los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, son claros en el sentido de distinguir que, el reconocimiento de la pensión se debe dar por parte de la entidad de seguridad social en pensiones cuando se verifiquen los requisitos de edad mínima y semanas cotizadas. En cuanto al disfrute, esto es, el derecho que tiene el afiliado a comenzar a percibir la pensión, sólo se hace efectivo cuando el mismo se retire del sistema, notificado a través de la novedad de retiro, al tenor de lo indicado por el Acuerdo 044 de 1989 (Decreto 3063 de 1989) en su artículo 5, que trata de la desafiliación, del artículo 25 numeral 4, del artículo 64 y 65 acerca de las novedades y sus clases, en el numeral 3 reza “retiro del trabajador cuando cesa el vínculo laboral”, siendo esta la poción adoptada por

la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo señalado en la sentencia 16.197 del 14 de noviembre de 2001 M.P. Dr. Luís Gonzalo Toro Correa.

Partiendo de lo descrito considera la Sala que la pensión de vejez deberá reconocer como se indicó en primera instancia a partir de la fecha en que la actora acredite el retiro del sistema toda vez que, según se observa de la historia laboral allegada por Colpensiones actualizada a mayo de 2022 la demandante aun continuaba realizando cotizaciones hasta el mes de marzo de 2022, sin que exista prueba en el expediente si la demandante ya cesó sus cotizaciones o efectuó la novedad de retiro del sistema.

La pensión debe ser reconocida en 13 mesadas al año al causarse el derecho después del 31 de julio de 2011 al tenor de lo dispuesto por el acto legislativo 01 de 2005.

Con respecto a la mesada pensional y la liquidación del IBL se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia en cuanto a que a la demandante le es mas beneficioso el IBL de los últimos 10 años de conformidad con el artículo 21 de la ley 100 de 1993 que para el caso bajo estudio es de \$2.366.416, al que aplicársele una tasa de reemplazo del 72.09% arroja una mesada pensional de \$1.705.949 para el año 2022.

Por todo lo mencionado lo legal y pertinente será CONFIRMAR en su integridad la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas en esta instancia por conocerse en consulta.

## **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Medellín, según lo argumentado en la parte motiva de esta sentencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

**TERCERO:** Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**SECRETARÍA SALA LABORAL**  
**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: PATRICIA DEL SOCORRO ÁLVAREZ ZAPATA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-025-2022-00031-01
RADICADO INTERNO	: 020-23
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente  
**HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 17 de marzo de 2023 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 17 de marzo de 2023 a la 5:00pm

  
**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO